Sanciones, trumpismo e hipocresía (II)

Por: Ángel Guerra Cabrera
Globalizacion, 17 de junio 2019
La Jornada 13 junio, 2019

Región: América Latina, Caribe, EEUU
Tema: Imperialismo, Política

Los planes desestabilizadoresy las agresiones de Estados Unidos contra la revolución bolivariana iniciaron muy temprano después de que el comandante Hugo Chávez asumió la presidencia en enero de 1999.

Luego de una feroz arremetida del sector empresarial contra el presidente, se produjo el derrotado golpe de Estado en abril de 2002, seguido en noviembre por el sabotaje contra Petróleos de Venezuela(PDVSA), la empresa pública que genera 98 por ciento de los ingresos en divisas del país, cuya prolongada paralización significó una pérdida económica de 16 mil millones de dólares.

La política desestabilizadora y golpista de Washington contra el gobierno bolivariano no ha cesado nunca, pero es a partir de 2013, con posterioridad al deceso de Chávez y en el primer gobierno del presidente Nicolás Maduro, que se inicia la guerra económica, primero de forma encubierta pero más adelante toma un cariz abierto y formal, de modo que está sustentada en decretos y leyes emitidos por la Casa Blanca y por el Congreso de Washington. El primer documento público en esta escalada es la orden ejecutiva 13692 dictada por el presidente Barack Obama en marzo de 2015, que con una cara muy dura declara a Venezuela *amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos*. La orden ha sido prorrogada cada año primero por Obama y más tarde por el peculiar sujeto que ocupa hoy la oficina oval en la Casa Blanca.

No es ocioso reiterar que estas acciones transgreden de manera flagrante la Carta de la ONU y otros importantes instrumentos del derecho internacional, como han subrayado los expertos del organismo mundial que han investigado y reportado las brutales agresiones contra la economía y el bienestar de los venezolanos; por cierto, sin que este organismo les haya prestado atención, pese a la seriedad y profesionalismo con que han elaborado sus informes. Al extremo de que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en una actitud que deja muchos cuestionamientos sobre su honestidad e integridad personal y como funcionaria internacional, se prestó a presentar un informe sobre los derechos humanos en el país bolivariano que parece dictado por el inefable John Bolton. Toda una paradoja, pues existe una asombrosa semejanza entre la guerra multidimensional de Nixon y Kissinger para derrocar al presidente Salvador Allende y la que se está llevando a cabo contra Venezuela.

Mayo de 2016 marca un hito importante en la guerra económica pues el banco alemán Commerzbank cierra todas las cuentas de instituciones, bancos públicos venezolanos y de PDVSA, en julio toma la misma medida Citibank, que un año después se niega a recibir los fondos para la compra de 300 mil dosis de insulina destinados a Venezuela. A partir de mediados de 2016, se repetirán e intensificarán acciones de esa naturaleza por muchos otros bancos y comenzará el bloqueo sistemático a la compra de alimentos y medicinas por Caracas hasta llegar a extremos de cerco y acoso tal vez sin precedente, pues junto a

Estados Unidos participan activamente sus aliados de la Unión Europea y las deleznables marionetas del Grupo de Lima: Duque, Bolsonaro, Piñera y Macri.

También a mediados de 2016 las inescrupulosas calificadoras de riesgo colocan a Venezuela con el riesgo financiero más alto del mundo (2640 puntos), muy por encima de países en guerra, a pesar de haber cumplido con sus compromisos de deuda externa. Desde 2013 el país pagó 63 mil 566 millones de dólares, sin embargo, el riesgo país incrementó 202 por ciento durante el mismo período. Cada 100 puntos de ese indicador equivalen al pago de uno por ciento adicional de tasa de interés. Se trata de una maniobra sin fundamento financiero, cuyo objetivo es encarecer el pago de la deuda para aumentar la sangría de la economía venezolana.

En agosto de 2017, Trump emite la orden ejecutiva 13808 que prohíbe la adquisición de deuda por Venezuela por un plazo mayor a 90 días, la obtención de acciones por su gobierno y el cobro de ganancias por Caracas, que corta los ingresos de Citgo, la muy productiva filial de PDVSA en territorio estadunidense. Posteriormente, Washington se roba Citgo con la complicidad del supertítere Guaidó, como ha ocurrido con muchos otros activos venezolanos. Un caso escandaloso es la retención de oro por valor de mil 200 millones de dólares depositado por Venezuela en el Banco de Inglaterra.

Al igual que hace con Cuba, Wa-shington impide que Venezuela tenga acceso a medicamentos en el mercado internacional. Las trasnacionales Baster, Abbot y Pfizzer se han negado a emitir certificados de exportación para medicamentos oncológicos destinados al país sudamericano en un acto verdaderamente inhumano y criminal, que ha ocasionado la muerte de pacientes.

En la próxima entrega se explicará cómo se generan la agresión contra el bolívar y la descomunal inflación y cómo el pueblo enfrenta esta política genocida.

Ángel Guerra Cabrera

La fuente original de este artículo es La Jornada
Derechos de autor © Ángel Guerra Cabrera, La Jornada, 2019

Comentario sobre artículos de Globalización en nuestra página de Facebook
Conviértase en miembro de Globalización

Artículos de: **Ángel Guerra Cabrera**

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). The Centre for Research on Globalization will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. The Center of Research on Globalization grants permission to cross-post original Global Research articles on community internet sites as long as the text & title are not modified. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Global Research articles in print or other forms including commercial internet sites, contact: publications@globalresearch.ca

www.globalresearch.ca contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.